

## ¿Cultivar su autonomía? La agroecología de las agricultoras brasileñas<sup>1</sup>

Isabelle Hillenkamp<sup>2</sup>

Recibido: 7 de febrero de 2019/Aceptado: 10 de mayo de 2019

**Resumen.** Heredera de las luchas campesinas, la agroecología surgió en Brasil a partir de la crítica de la inviabilidad socioambiental de la modernización agrícola y de la afirmación de una organización más autónoma y sostenible del trabajo y de la vida. Movimientos de mujeres rurales y organizaciones feministas ocupan este campo político. Comprender el significado de la “agroecología feminista” en Brasil y evaluar su potencial de transformación social requiere volver a los conflictos sobre las relaciones de producción y de género por los cuales se constituyó, y analizar mediante qué prácticas la autonomía se construye (o no). En este artículo, desarrollo este análisis a partir de una investigación de campo con la red de agricultoras agroecológicas de Barra do Turvo, en el sureste del país. A nivel teórico, me apoyo en un enfoque relacional de la autonomía, reconociendo la necesidad de interdependencias en las diferentes esferas de la vida social. Para ello, me baso en una concepción sustantiva y feminista de la economía, haciendo hincapié en todas las formas de trabajo, en particular, las del cuidado.

**Palabras clave:** agroecología; feminismo; Brasil; autonomía; economía sustantiva; cuidado.

### [en] To cultivate one's autonomy? The agroecology of Brazilian women farmers

**Abstract.** Inheriting peasant struggles, agroecology has emerged in Brazil from the criticism of the social-environmental invalidity of agricultural modernization and the affirmation of practices allowing a more autonomous and sustainable organization of work and life. Rural women's movements and feminist organizations are occupying this political field. To understand the meaning of “feminist agroecology” in Brazil and to evaluate its potential for social transformation requires us to return to the conflicts, related to the relations of production and gender, by which it was constituted and to analyse by which practices autonomy is (or is not) built. In this article, I develop this analysis from field research with the network of agroecological women farmers of Barra do Turvo, in the south-east of the country. On a theoretical level, I use a relational approach to autonomy, recognizing the need for interdependencies in the different spheres of social life. To this end, I rely on a substantive and feminist conception of the economy, drawing attention to all forms of work, particularly care work.

**Keywords:** agroecology; feminism; Brazil; autonomy; substantive economy; care.

**Sumario.** 1. Introducción. 2. Autonomía de las agricultoras y agroecología: proyecto político, abordaje conceptual y empírico. 3. Prácticas de agroecología y organización de las mujeres: dos visitas y una reunión. 3.1. La agroforestería de Magdalena, comunidad *quilombola* de Ribeirão Grande y Terra Seca. 3.2. La estancia de Pedro y Lucimara, barrio de agricultura familiar de Bela Vista. 3.3. Reunión de un grupo de productoras. 4. Valle del Ribeira: desarrollo, territorio, comunidades tradicionales y género. 4.1. De la esclavitud a las comunidades remanentes de *quilombo* y a las nuevas “invasiones”. 4.2. Las identidades políticas y el conflicto central: tierra y territorio. 4.3. El conflicto encubierto: desigualdad

<sup>1</sup> Agradezco a Miriam Nobre, Sébastien Carcelle, Nathalie Greff-Santamaria y Horacio Maez, así como a un revisor anónimo de la RAS por su cuidadosa revisión de diferentes versiones de este texto. Las posiciones defendidas aquí siguen siendo de mi exclusiva responsabilidad.

<sup>2</sup> Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD-CESSMA), [isabelle.hillenkamp@ird.fr](mailto:isabelle.hillenkamp@ird.fr)

y violencia de género. 5. La agroecología feminista: historia de la constitución de sus sujetos políticos. 5.1. Movimientos de mujeres rurales y agricultura alternativa en la “redemocratización”. 5.2. Agricultura familiar y género en la agenda neoliberal. 5.3. Agroecología feminista y políticas públicas de los gobiernos “progresistas”. 6. Consideraciones finales: ¿construyendo autonomía? 7. Referencias bibliográficas. 8. Lista de siglas

**Cómo citar:** Hillenkamp, I. (2019). ¿Cultivar su autonomía? La agroecología de las agricultoras brasileñas, en *Revista de Antropología Social* 28(2), 297-322.

## 1. Introducción<sup>3</sup>

La escena tiene lugar en noviembre de 2018 en la sede de la Asociación de la comunidad *quilombola*<sup>4</sup> de Ribeirão Grande y Terra Seca, en el municipio de Barra do Turvo, en el valle del Ribeira, una región de selva atlántica, sujeta a políticas de protección del medio ambiente, en el sudeste de Brasil. Unas veinte agricultoras, miembros de una red de agroecología, están reunidas con miembros de grupos de consumo responsable de la ciudad de San Pablo que adquieren sus productos desde hace dos años. Las agricultoras pertenecen a comunidades *quilombolas* o a barrios llamados de “agricultura familiar” de Barra do Turvo. Una mujer, miembro del equipo técnico de la *Sempreviva Organização Feminista* (en adelante SOF), la ONG brasileña que organizó esta red, coordina la reunión. Como el resto de su equipo, es agrónoma y militante en los movimientos agroecológico y feminista. Ella pide a los representantes de los seis grupos de agricultoras y de los seis grupos de consumidores presentes hablar sobre los “desafíos” que encuentran en la comercialización y la compra de productos.

En primer lugar, toma la palabra una agricultora para decir que el tamaño de su grupo disminuyó mucho y que hoy son solamente cuatro, lo que les permite tener un volumen individual de venta más importante, pero que es necesario aumentar, ya que los principales programas de compra pública de los productos de la agricultura familiar están suspendidos desde principio de año. Una agricultora de otro barrio destaca los esfuerzos de su grupo para incluir a más mujeres, pero también señala la necesidad de aumentar las ventas para poder mantener esta abertura. Alerta, además, sobre el hecho de que una agricultora de su grupo fue amenazada de muerte por su marido alcohólico. Explica que el grupo le proporcionó su apoyo para presentar la denuncia a la policía y tratar de obtener medidas de protección, pero que las mismas son inciertas. Otras contribuciones se centran en la continuidad del apoyo proporcio-

<sup>3</sup> Swiss Network for International Studies, proyecto *Feminist Analysis of Social and Solidarity Economy: Views from Latin America and India* (Análisis Feminista de la Economía Social y Solidaria: Miradas desde América Latina y la India), coordinado por Christine Verschuur (IHEID, Ginebra), enero 2016–mayo 2018; Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil, proyecto *Economía Feminista e Solidária: ações para o fortalecimento da autonomia econômica das mulheres* (Economía Feminista y Solidaria: Acciones para el Fortalecimiento de la Autonomía Económica de las Mujeres), coordinado por Fábio Sanchez (UFSCar, Brasil), mayo 2016–julio 2019; Embajada de Francia en Brasil, proyecto *Mulheres Jovens do Campo Traçando Caminhos* (Mujeres Jóvenes del Campo Trazando Caminos), coordinado por Miriam Nobre (Sempreviva Organização Feminista, Brasil), octubre 2018–septiembre 2019.

<sup>4</sup> De acuerdo con la Asociación Brasileña de Antropología, el término *quilombo* se refiere a “toda comunidad negra rural que agrupe descendientes de esclavos que viven de la cultura de subsistencia y en las que las manifestaciones culturales tienen un fuerte vínculo con el pasado”.

nado por el municipio a la red de comercialización a través del camión que pone a disposición para el transporte de los productos.

Los miembros de los grupos de consumo responsable recuerdan su propio contexto –para la mayoría, trabajadores y militantes políticos de izquierda, que viven en la periferia de San Pablo– y expresan su compromiso con la red y las agricultoras y su gratitud por el hecho de poder comprar alimentos variados y de calidad a precios “populares”. Al mismo tiempo, señalan sus límites para incrementar las ventas, debido al peso del trabajo de logística, realizado de manera voluntaria, y a la dificultad de convencer a la gente para cambiar su modo de consumo.

La agrónoma de la ONG menciona las posibilidades de la diversificación de las ventas, al mismo tiempo que recuerda que su organización desea hacer evolucionar gradualmente su rol, de la intervención social a la cooperación y la formación de alianzas más amplias, como, por ejemplo, con los grupos de consumo responsable. También destaca la posición de la SOF en el movimiento feminista y su objetivo de contribuir a la inserción de las agricultoras en este movimiento.

Por último, la Presidenta de la Asociación de la comunidad *quilombola* de Ribeirão Grande y Terra Seca, una mujer negra de unos cuarenta años, miembro del directorio de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Rurales Negras *Quilombolas* toma la palabra. Recuerda la resistencia histórica de su pueblo en el valle del Ribeira y en general en Brasil frente a las amenazas representadas por grandes explotaciones agrícolas que codician sus tierras, el Estado que busca reducir su presencia en áreas de protección ambiental y las grandes empresas interesadas en apropiarse de sus recursos naturales. Expresa su preocupación por el contexto político actual, dado que el presidente elegido en octubre de 2018, Jair Bolsonaro, se pronunció en repetidas ocasiones a favor de proyectos de “desarrollo” en los territorios ocupados por comunidades indígenas y *quilombolas*. Defiende la importancia del feminismo para liberar a las mujeres de una parte del trabajo de cuidado, que hoy les está totalmente atribuido, y permitirles participar plenamente en la defensa de sus territorios y de los modos de vida de sus comunidades.

## **2. Autonomía de las agricultoras y agroecología: proyecto político, abordaje conceptual y empírico**

La experiencia de la red de Barra do Turvo ilustra un proyecto político más amplio de agroecología feminista integrado por ONGs y movimientos de mujeres rurales de Brasil, destinado a fomentar un modo de agricultura ecológicamente sostenible y, al mismo tiempo, a contribuir a la igualdad de género y a la autonomía de las mujeres.

La noción de autonomía surgió en el debate de las mujeres campesinas de los años ochenta, cuando, en el sur y el nordeste del país, se organizaron en movimientos denominados “autónomos” para defender sus derechos sociales que, según ellas, no fueron suficientemente considerados por los movimientos rurales mixtos (Butto, 2017). En la década siguiente, estos movimientos se expandieron y se volvieron críticos de las dependencias producidas por el modelo de agronegocio en relación a los insumos químicos y los mercados agrícolas (Nobre, 2015). En la década de 2000, los movimientos de mujeres rurales y las ONGs aliadas adoptaron el vocabulario de la agroecología para reivindicar el valor del trabajo de cuidado y reproducción de la vida humana y no humana realizado por estas mujeres (Hillenkamp y Nobre, 2018).

Destacaron la producción de alimentos diversificados y de calidad, el mantenimiento de los ecosistemas y el conocimiento de las fitoterapias que dichas mujeres poseen, en virtud del papel de cuidado que se les atribuye socialmente.

Según estos movimientos y sus aliados, el reconocimiento del valor monetario y social del trabajo de las mujeres en la agroecología debe aumentar su autonomía en el contexto familiar y comunitario, en su relación con el Estado y el mercado, frente a la persistente desigualdad en la división sexual del trabajo y en el acceso de las mujeres y los hombres a determinados espacios. Para la SOF, la falta de autonomía de las agricultoras de Barra do Turvo se refleja en sus extensas jornadas, resultado de la sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado de los enfermos y de los niños, pero también de los adultos sanos, de las labores agrícolas y, en algunos casos, de otras actividades de generación de ingresos (Marques, Nobre, Moreno *et al.*, 2018). Su autonomía se ve aún más reducida por la organización social del espacio, que favorece a los hombres no solo en el acceso a los mercados y a los espacios de participación política, sino también en las políticas públicas. A partir de esta observación y del principio según el cual “nadie se libera solo” (Freire, 1996), estas organizaciones consideran que la autonomía de las agricultoras requiere una organización colectiva, a través de grupos, redes y movimientos, para que se reconozca la importancia de su trabajo y se renegocien todas las relaciones de poder.

Siguiendo este argumento, adopto en este texto la autonomía de las agricultoras y el desarrollo de la agroecología como una perspectiva analítica y de transformación social. Con este fin, me ubico, a nivel teórico, en un enfoque relacional de la autonomía, combinado con una concepción sustantiva de la economía y una postura feminista orientada al reconocimiento de todas las formas de trabajo. Había desarrollado estos marcos teóricos –economía sustantiva y feminista– en investigaciones anteriores sobre la economía solidaria en Bolivia (Hillenkamp, 2014; 2015). Mi diálogo con activistas del movimiento agroecológico feminista brasileño se estableció sobre nuestra base común de la economía feminista. Más tarde, ellas me llevaron a articular la noción de autonomía de manera más profunda en mi marco teórico; por otro lado, me pidieron que discutiera la contribución de Karl Polanyi a su planteamiento político. En este texto, trato de explicitar de manera reflexiva los vínculos entre mi elaboración teórica, el proyecto político y las prácticas locales de agroecología feminista.

Ser autónoma significa no depender de otros para tomar decisiones o actuar. Sin embargo, considero que ser autónoma no significa, en general, no depender de nadie. Más bien, es a través de relaciones positivas y de la inclusión en ciertos grupos y en ciertas instituciones que se adquiere autonomía. Por lo tanto, la autonomía requiere la renegociación de las relaciones de poder y opresión existentes y el desarrollo de nuevas interdependencias, más igualitarias e inclusivas. La ética del cuidado, introducida por la filósofa Joan Tronto (2009 [1993]), arroja luz y refuerza la necesidad de tal enfoque al reconocer la vulnerabilidad intrínseca de la vida, humana y no humana. Esta necesidad es aún mayor en situaciones de alta desigualdad social, como las que enfrentan las agricultoras de la red de mujeres en la agroecología de Barra do Turvo. En este sentido, la autonomía no se basa en un estado ilusorio de ausencia de vulnerabilidad, sino en el reconocimiento de la vulnerabilidad y la búsqueda, nunca lograda plenamente, de relaciones que garanticen la protección en pie de igualdad.

Asimismo, considero que la autonomía atañe a todas las esferas de la vida, doméstica, económica, política y social, de forma interrelacionada. La esfera económica, en particular, debe entenderse en el sentido sustantivo, incluyendo tanto las prácticas mercantiles como las no-mercantiles. El enfoque sustantivo de Karl Polanyi sobre la economía es relevante para analizar la autonomía en esta esfera, en la medida en que reconoce todas estas prácticas y enfatiza la dependencia de los seres humanos de la naturaleza y de sus semejantes para asegurar la satisfacción de sus necesidades materiales (Polanyi, 1967 [1957]). Su tipología de los cuatro principios de integración económica –mercado, reciprocidad, redistribución y *householding* (administración doméstica)– permite identificar diferentes tipos de interdependencia en este ámbito, pero no por ello implica que ciertos principios contribuyan de manera intrínsecamente positiva a la autonomía (Hillenkamp y Servet, 2015).

Nancy Fraser (2013) mostró la irreductibilidad de los tres movimientos de mercantilización, protección de la sociedad (basada en la inmersión de la economía en relaciones no mercantiles) y emancipación. Así, mientras que en algunos casos el acceso al mercado libera, en otros crea dependencias. Por el contrario, las prácticas de reciprocidad, redistribución y administración doméstica tejen protecciones en las que los individuos a veces pueden apoyarse para autonomizarse. Sin embargo, la protección también puede ser opresiva, por ejemplo, cuando la administración doméstica reproduce las relaciones de dominación entre hombres y mujeres y entre generaciones. Por lo tanto, la contribución de diferentes tipos de prácticas económicas a la autonomía debe analizarse de manera específica, de acuerdo con las modalidades particulares de los principios de integración económica que expresan.

Por último, presto especial atención a las distintas formas de trabajo que contribuyen o, al contrario, limitan la autonomía de las agricultoras. De acuerdo con activistas y teóricas feministas, considero que el reconocimiento de las formas ocultas de trabajo no remunerado de las mujeres es un requisito previo para la renegociación de las relaciones de género. Las feministas materialistas (Delphy, 1998; Federici, 2013; Hirata y Kergoat, 2007) denunciaron primero la subordinación de las mujeres resultante de la explotación del trabajo doméstico y de la división sexual del trabajo en el modo de producción capitalista. Posteriormente, otras autoras evidenciaron el valor positivo del trabajo de cuidado. Basándose en la ética del cuidado de Tronto, reconocieron al cuidado de manera amplia, como:

Actividad característica de la especie humana, que abarca todo lo que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo, para que podamos vivir lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro medioambiente, lo que buscamos conectar en una red compleja de apoyo a la vida (Tronto, 2009: 13, 143; citado en Zielinski, 2010: 632. Traducción propia).

La economista Cristina Carrasco (2014) propuso un circuito ampliado del trabajo necesario para la reproducción de la vida, incluyendo el trabajo realizado en la esfera de la producción capitalista mercantil y en la esfera del cuidado. En este marco, queda claro que la finalidad de la economía debe ser la reproducción sostenible de la vida, y no el beneficio privado, y que la igualdad de género implica

el reconocimiento del trabajo de cuidado –y la inclusión de los hombres en esta esfera– y no solo la participación de las mujeres en la esfera de la producción capitalista mercantil.

Sobre esta base conceptual triple –autonomía relacional, lectura no normativa de la economía sustantiva y planteamiento feminista del trabajo, de la vulnerabilidad y del cuidado– pretendo aportar elementos empíricos para entender mejor una iniciativa como la de la red de agricultoras agroecológicas de Barra do Turvo y evaluar su alcance transformador.

Me baso, a nivel empírico, en datos recopilados desde 2016 en seis comunidades de Barra do Turvo –dos *quilombolas* y cuatro de la agricultura familiar– en el marco de proyectos de investigación-acción<sup>5</sup> en asociación con la SOF. Estos datos incluyen formas convencionales de registro (notas de campo, transcripciones de entrevistas, informes de reuniones), como también lecciones aprendidas en las actividades de educación popular (talleres, capacitaciones) donde los resultados de mis investigaciones fueron discutidos y puestos al servicio de una producción colectiva de conocimientos con las agricultoras y el personal de la ONG<sup>6</sup>. También recurro a observaciones y entrevistas realizadas a líderes del movimiento de agroecología feminista durante encuentros regionales y nacionales.

Estos datos me permiten proponer una etnografía de la red de agricultoras agroecológicas de Barra do Turvo, que destaca la complejidad de las relaciones de género, clase y raza, y de los procesos de transformación social y de construcción de autonomía en diferentes esferas y diferentes niveles.

En primer lugar (parte 3), presento las prácticas agropecuarias de dos mujeres de la red y sus familias, la primera perteneciente a una comunidad *quilombola* y la segunda a un barrio de la agricultura familiar, como también discusiones en una reunión de un grupo de productoras. Esta descripción me sirve para mostrar el contenido de estas prácticas en diferentes contextos locales y dar una idea de cómo pueden contribuir a la autonomía de las mujeres. En segundo lugar (parte 4), ubico a estas experiencias en el contexto político y socioeconómico del valle del Ribeira, mostrando cómo la identidad *quilombola* y la agroecología surgen en la lucha de las comunidades locales para mantenerse en el territorio frente a los conflictos de la tierra y el medio ambiente que caracterizan a la región. También muestro que estos conflictos tienden a eclipsar las desigualdades de género en el seno de las comunidades y el hecho de que la autonomía de las mujeres requiere un cambio del conjunto de estas relaciones. En la parte siguiente (parte 5), coloco la formación del movimiento brasileño de agroecología feminista en perspectiva histórica, mediante la identificación de los debates y de las relaciones de fuerza por las que se forjó, teniendo de un lado, a los actores del modelo dominante del agronegocio y, del otro, a los partidarios de una agricultura familiar y de una agroecología que ignora el género. Al hacerlo, contextualizo también el papel de la SOF y su acción en el valle del Ribeira en el escenario nacional. Para finalizar vuelvo sobre la construcción de la autonomía de las agricultoras agroecológicas de la red de Barra do Turvo a partir de la interacción de los diferentes procesos.

---

<sup>5</sup> Ver nota n°3.

<sup>6</sup> Para destacar: el cortometraje “Caminhos da autonomia” (Caminos de la autonomía) que recorre la experiencia de la red (<https://www.youtube.com/watch?v=GG52oweD3e0>).

### 3. Prácticas de agroecología y organización de las mujeres: dos visitas y una reunión

#### 3.1. La agroforestería de Magdalena<sup>7</sup>, comunidad *quilombola* de Ribeirão Grande y Terra Seca

Agosto de 2018, seminario de capacitación de la red de agricultoras organizado por la SOF en la comunidad *quilombola* de Ribeirão Grande y Terra Seca. A doña Magdalena se le pidió mostrar su “agroforestería” a una treintena de mujeres de otros barrios presentes en el seminario. El grupo sale de la sede de la Asociación de la comunidad, desciende por un sendero escarpado, cruza un barranco por un precario puente de madera y vuelve a subir el sendero del otro lado. En medio de una vegetación densa, aparece la casa de Magdalena. Mirando más detenidamente y siguiendo sus explicaciones, descubrimos una multitud de árboles y plantas cultivadas: *jabuticabas*, lichis, paltos, naranjos, limoneros, papayas, hojas de *taioba*, como también varias especies de árboles de plátano y plantas medicinales. Las agricultoras preguntan sobre el uso de estas plantas y toman esquejes. Al pie del *jabuticaba*, Magdalena señala la cruz que marca el cementerio de los niños y explica que en la cultura *quilombola*, lo sagrado siempre está conectado a la naturaleza. Con el dedo señala una pequeña área deforestada en mitad de la montaña escarpada que domina su casa, donde ella cultiva la yuca, frijoles y el arroz para el consumo familiar. Todavía más alto, en la cima árida de la montaña (*sertão*), su marido hace pastar su rebaño.

Aquí, mujeres y hombres realizan su trabajo agropecuario en espacios separados. Los espacios de las mujeres están ubicados cerca de las casas, donde se integran en un flujo circular de plantas y pequeño ganado, para la alimentación y la salud humana, y de residuos orgánicos utilizados para fertilizar el suelo y alimentar a los animales. Para ello, las mujeres mantienen una ganadería y cultivos diversificados e integrados en la selva atlántica, que requieren saberes múltiples (semillas, uso de especies domésticas y silvestres, cultivos asociados, poda de árboles, etc.). Estos saberes son la base de su autonomía dentro de estos espacios, en un contexto marcado al mismo tiempo por la escasez de dinero y la poca comodidad material. Estos saberes se desarrollan gracias, en particular, a los intercambios con otras mujeres. La agroecología feminista extiende estas redes de intercambio recíproco más allá del círculo familiar o comunitario donde suelen estar circunscritas, como aquí a través de la visita de un grupo de mujeres agricultoras de otros barrios organizada por la SOF.

Al retornar a la sede de la Asociación, la Presidenta muestra los límites de las tierras colectivas de la comunidad y la zona de superposición con la Reserva de Desarrollo Sostenible del Mosaico de Unidades de Conservación de Jacupiranga, en la que se encuentra la agroforestería de Magdalena. Señala la diferencia en la vegetación, significativamente más densa, de la parte de la comunidad que no está en la Reserva y se lamenta que la cultura de quema, practicada tradicionalmente por los *quilombolas*, para la yuca, los frijoles y el arroz, esté prohibida. Finalmente señala una parte completamente deforestada más allá de las tierras de la comunidad, que corresponde a una hacienda de crianza de búfalos, propiedad de un paulista. A pesar de que se encuentra en la Reserva, esta tierra fue completamente quemada en la década de 1990. Nos deja meditar sobre las amenazas a la comunidad, la diferencia de trato de las autoridades del Mosaico de Jacupiranga hacia los terratenientes y las comuni-

<sup>7</sup> Este nombre, como el de otras personas que aparecen en este texto, es un apodo.

dades locales, observando al mismo tiempo que algunas personas de la comunidad están trabajando en la hacienda, y que esto, según ella, “debilita la lucha”.

### 3.2. La estancia de Pedro y Lucimara, barrio de agricultura familiar de Bela Vista

Noviembre de 2018, barrio de agricultura familiar de Bela Vista. Pedro y Lucimara, los anfitriones donde estoy alojada con mi esposo y mis dos hijos durante la reunión de los grupos de consumo responsable, nos hacen visitar su propiedad. Pedro nos muestra sus árboles frutales y, rápidamente, toma a un niño debajo de cada brazo para hacerles cruzar un paso fangoso en dirección del pastizal donde se encuentran sus 15 vacas y su caballo. Lucimara me retiene cerca de la casa para mostrarme las plantas nativas comestibles. Nos reunimos en lo alto del pastizal, donde Pedro nos muestra la superficie de su tierra, de la que solo utiliza una parte. Además del pastizal, se ve una pequeña plantación de caña de azúcar y yuca, para consumo familiar y venta en el barrio, y otra plantación más amplia con hierba de té, fruto de un proyecto de una agencia de cooperación en los años 1990 y que hasta ahora solo comercializó en el interior de la comunidad. Descendiendo, él agarra un tronco de madera, bueno para la fabricación de muebles, y explica: “aquí nada se desperdicia”. Corta una palmera *jussara* para la cena, mientras nos dice: “antes de que los contrabandistas la roben”.

Lucimara recuerda los años difíciles que pasaron con sus hijos cuando compraron este terreno en 1992. Cuenta que tuvieron que replantar completamente el pasto porque la hierba que había crecido después de que el área fue deforestada, no tenía vitamina y no era apta para el pastoreo de las vacas. Durante varios años, la familia no tuvo ingresos en efectivo y vivía de los productos de su tierra y de algunos artículos intercambiados por un ternero o una vaca con el dueño de la tienda del barrio. Nuevamente en las cercanías de la casa, Lucimara nos muestra su gallinero, su huerta y decenas de plantas medicinales en macetas con las que prepara remedios que da o vende a precios bajos en la comunidad y que comercializa desde hace dos años en la red de los grupos de consumo. En la entrada a la *estancia* descubrimos los esquejes de plantas nativas de la selva atlántica que la pareja cultiva para venderlos a las grandes empresas que están obligadas a medidas de reforestación. En los alrededores, se apilan grandes bidones de plástico que se utilizan para la construcción de fosas sépticas, según una tecnología adaptada que le transmitieron miembros de los grupos de consumo responsable. La necesidad es incuestionable porque el desecho de aguas residuales contamina los cursos de agua.

De nuevo en la casa, Pedro responde negativamente a mi pregunta de si utiliza fertilizantes químicos. Más tarde, una de las agrónomas de la SOF relata las discusiones que tenía con él sobre este tema. Orientado por otros agrónomos, Pedro había hecho un análisis del suelo y aplicaba una “receta” que consistía en una cierta cantidad de calcio, para disminuir la acidez del suelo, y nutrientes N, P, K en gránulos, todo comprado en una tienda especializada. Según la agrónoma de la SOF, a Pedro le empezaron a interesar los métodos agroecológicos después de haberlo ayudado a tratar una enfermedad de los mandarinos, combinando una poda adecuada de los árboles con un fertilizante a base de estiércol de gallina. A partir de esta experiencia, ella le explicó los principios generales de la agroecología —“que se basa en la incorporación de materia orgánica, la plantación de fertilizantes verdes, la incorporación de materia verde en el suelo, el uso de cobertura vegetal, el compuesto orgánico, que ayuda a reducir el PH y mejorar los intercambios de nutrientes en las raíces”. De esta

manera, la pareja redujo su dependencia a los fertilizantes químicos, cuya compra había llegado a absorber una parte significativa de sus ingresos, y afirmó su lógica de autosuficiencia (*householding*) elevándola, gracias al conocimiento adquirido de la SOF y de otras redes, como la de los grupos de consumo responsable, más allá del nivel de subsistencia. Lucimara, que domina la preparación de remedios naturales gracias a los cursos seguidos en la red de la Comisión Pastoral de los Niños vinculada a la Iglesia católica y practica la homeopatía rural, que es la que se aplica a plantas y animales (Carcelle, 2019), fue una aliada en estas discusiones y en la evolución de las prácticas de su marido. La adopción por parte de este último de técnicas agroecológicas significa para ella inseparablemente una mejora en el control de la producción agrícola y una valorización de sus conocimientos en términos de cuidado de la naturaleza y de los seres humanos.

### 3.3. Reunión de un grupo de productoras

Dos años antes, mayo de 2016, casa de una agricultora de una comunidad *quilombola*. Las seis mujeres que forman parte del grupo local de productoras van llegando poco a poco a la reunión convocada por el equipo técnico de la SOF para preparar el pedido de la Quitandoca, una tienda de productos orgánicos de la ciudad de San Pablo. Antes del inicio de la reunión, las mujeres discuten sobre el seminario organizado algunos días antes por la SOF en la ciudad vecina de Registro y a la que algunas de ellas asistieron con otras “agricultoras de referencia” de doce municipios del valle del Ribeira donde la ONG ejecuta la política de Asistencia Técnica y de Extensión Rural (en adelante ATER) del gobierno federal. Vuelven sobre el debate de la “coyuntura política” realizado durante el seminario y sobre la inminente destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. Manifiestan su preocupación debido a la probable interrupción del Programa de Adquisición de Alimentos (en adelante PAA) que absorbe la mayor parte de los productos de su comunidad: “la política para los agricultores no puede parar”, dice Margarita, una mujer de aproximadamente 70 años de origen guaraní. Estas mujeres tienen una necesidad imperiosa de vender sus productos para generar ingresos. La política de ATER ejecutada por la SOF debe permitirles compensar la pérdida del PAA: “o bien conseguimos vender nuestros productos con la SOF, o no participamos de la ATER...”.

El contacto establecido por la SOF con la Quitandoca se inscribe en este contexto tenso de grandes cambios anunciados en las políticas para la agricultura familiar. Paralelamente a los grupos de consumidores, el pedido de productos de la Quitandoca debe permitir a las agricultoras de las dos comunidades *quilombolas* que participan del proyecto vender parte de su producción. Con una vasta extensión de tierras colectivas y el conocimiento de la agroforestería, estas comunidades poseen un importante excedente de producción: plátanos, ñames, yucas, frijoles, arroz, caña de azúcar, como también muchas frutas y verduras y algunos productos transformados. La reunión está destinada a dividir el pedido de la Quitandoca entre las seis mujeres que componen el grupo y organizar la logística para que los productos sean recogidos por el camión de la municipalidad de Barra do Turvo tres días más tarde.

Equipada con un cuaderno, Rosa, una agricultora de unos 40 años comienza a distribuir el pedido mediante la elaboración de una tabla que contiene los nombres de las agricultoras y los productos a entregar. Madre de tres hijos y líder de la Comisión Pastoral de los Niños, está acostumbrada a organizar el pesaje y el control de vacu-

nación de niños y mujeres embarazadas. Las otras agricultoras intentan entender su cálculo hasta que la agrónoma de la SOF saca un papel de gran tamaño y propone colgarlo en la pared para que todas puedan seguir la repartición y discutir los criterios. Una de las agricultoras manifiesta abiertamente que su objetivo es obtener la mayor cantidad posible del pedido. Otra agricultora, jubilada, se propone solamente para algunos productos y defiende la parte que le corresponde a Rosa, cuyo marido acaba de tener un accidente en el trabajo y que tiene, según ella, la mayor necesidad de ingresos. Margarita, por su lado, lee con dificultad y teme ser perjudicada. Todas coinciden en que el pedido –del orden de los 500 kilogramos de productos *in natura*, dividido entre dos grupos– es muy pequeño en comparación con sus volúmenes de producción. La agrónoma de la SOF sugiere proponer productos con valor agregado, como el cuscús *quilombola* (elaborado con yuca), el pan artesanal hecho con diversos tipos de harina (maíz, plátano verde, yuca...) y productos locales, como las raíces de azafrán.

La comercialización de estos productos es una contribución esencial a los ingresos y la autonomía económica de estas mujeres, pero su acceso a los mercados agrícolas es frágil. Su dependencia del mercado público (PAA) revela su condición de beneficiarias de este programa y la limitación de su reconocimiento como sujetas de derecho, además de la estrechez de sus otras redes de comercialización. La Quitandoca representa un intento de la SOF de acercarlas a otro tipo de compradores, atentos al valor de su producción agroecológica, pero la construcción de esta relación requiere que se organicen colectivamente. Empujadas por la necesidad de dinero, algunas defienden sus necesidades individuales a corto plazo, en detrimento de los valores de solidaridad afirmados por otras que son necesarios para su acceso colectivo a este mercado.

#### **4. Valle del Ribeira: desarrollo, territorio, comunidades tradicionales y género**

De acuerdo con los datos estadísticos, el valle del Ribeira alberga 7.037 establecimientos de agricultura familiar (IBGE, 2006), 24 comunidades guaraníes o kaingangs (Centro de Trabalho Indigenista, 2015) y 66 comunidades *quilombolas* (ISA, 2016), así como grandes haciendas y latifundios. Es una región montañosa, de una extensión de 1,7 millones de hectáreas y formada por la mayor porción continua de selva atlántica de Brasil. Al mismo tiempo es la región con los menores índices de desarrollo humano (IDH) del Estado de San Pablo. El municipio de Barra do Turvo tiene aproximadamente 8.000 habitantes para una superficie de 100.800 hectáreas, de las cuales dos tercios se encuentran en unidades de conservación ambiental. Cuenta con siete comunidades *quilombolas* y varios barrios de “agricultura familiar”. De estos, algunos son comunidades negras que no buscaron su reconocimiento como *quilombolas*, y otras, como Bela Vista, son ocupaciones más recientes. Personas de origen guaraní, a menudo personas mayores, viven en algunos barrios, pero no hay aldeas indígenas en Barra do Turvo.

##### **4.1. De la esclavitud a las comunidades remanentes de *quilombo* y a las nuevas “invasiones”**

Explorado desde el siglo XVI por los colonizadores portugueses, el valle del Ribeira pasó por varios ciclos económicos (minería y producción de arroz) basados en la

mano de obra esclava negra, antes de caer en la recesión alrededor de la segunda mitad del siglo XIX. Este contexto permitió que los antiguos esclavos se transformaran en campesinos autónomos, constituyendo lo que los textos clásicos de los estudios rurales paulistas llamarían de “civilización caipira” (Cándido, 1964, Queiroz, 1973, *apud* Sánchez, 2004: 61). Los habitantes de Ribeirão Grande y Terra Seca cuentan que sus ancestros eran dos primos, esclavos en haciendas ubicadas en los actuales municipios de Eldorado e Iporanga, que sus dueños habían abandonado para dedicarse a actividades más lucrativas –en este caso la extracción de minerales en el estado de Minas Gerais. Según estos relatos, estos dos primos y sus esposas se establecieron en 1889 en las tierras actualmente ocupadas por la comunidad y vivieron de forma autárquica, manteniendo vínculos solo con sus parientes establecidos en comunidades vecinas, hasta la década de 1970.

En la segunda mitad del siglo XX el valle del Ribeira se convirtió en blanco de grandes proyectos de “desarrollo”, como represas, minería y la construcción de carreteras, en particular la autopista BR 116, inaugurada en 1961, que cruza la región uniendo las metrópolis de San Pablo y Curitiba. Como resultado del movimiento conservacionista emergente en esta época y, probablemente, del interés de las dictaduras militares (1964 – 1985) de crear instrumentos de control de este territorio donde se refugiaban grupos de guerrilla rural<sup>8</sup>, la región también pasó a albergar tres parques nacionales. Uno de ellos es el Parque Estatal Jacupiranga, establecido en 1969, que abarcaba la mayor parte del actual municipio de Barra do Turvo. El municipio fue creado en 1964 y, en la década de 1970, se conectó a la autopista BR 116 a través de una carretera construida a lo largo del río Turvo, a lo largo del cual transitaba el transporte local, hasta esta fecha en canoa y a caballo.

Según los relatos de los habitantes de Ribeirão Grande y Terra Seca, estas infraestructuras llevaron a un cambio profundo en su modo de vida. Allanaron el camino para una política local de modernización basada en la deforestación, que acarreó nuevas actividades ganaderas y la especialización agrícola, sobreponiéndose a su forma de agricultura diversificada e integrada en la selva atlántica. En este contexto también, las tierras desocupadas de latifundios, algunas de las cuales estaban ubicadas dentro del Parque Jacupiranga, fueron deforestadas y vendidas en el mercado informal a familias que generalmente ignoraban la existencia del Parque y de los latifundios. Surgieron nuevos barrios, como Bela Vista, donde se establecieron familias de agricultores originarios en su mayoría de otros estados del país, que habían emigrado a las afueras de las grandes ciudades, en particular Curitiba, en los años sesenta y setenta, y que ahora estaban expulsados de las mismas por la crisis económica.

En el mismo período, el control del Estado sobre los Parques, que hasta entonces había sido relativamente suave, se intensificó con la creación, en 1986, de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del Estado de San Pablo. Este control se tradujo por intervenciones frecuentes (expulsiones y aprehensiones) contra las comunidades negras y las nuevas poblaciones consideradas “invasoras”. Se afirmó una interpretación restrictiva de la conservación ambiental, en la que el papel de las comunidades locales en el mantenimiento de los ecosistemas es negado y la presencia humana en las áreas de conservación es excluida (Bernini, 2015).

---

<sup>8</sup> Ver el relato de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, que abordó la represión a la guerrilla en el valle del Ribeira, <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=358871> (acceso: 19/12/18).

Por otro lado, la redemocratización de Brasil culminó en 1988 con la aprobación de la Constitución denominada “ciudadana”. Entre otras cosas, la Carta constitucional reconoció la categoría de pueblos y comunidades tradicionales, abriendo a las comunidades negras la posibilidad de ser reconocidas como remanentes de comunidades *quilombolas*, con derecho a la propiedad colectiva de las tierras que estaban ocupando (artículo 68)<sup>9</sup>. En términos más generales, este contexto permitió el despliegue de movimientos populares y la entrada en la escena política de “nuevos personajes” (Sader, 1989), como el movimiento negro, los pueblos indígenas y de la selva, o incluso, el movimiento feminista y el de agricultura alternativa (véase parte 5).

En el valle del Ribeira, el deterioro de las relaciones con las autoridades responsables de la gestión de los Parques, agravado por las prácticas de acaparamiento de las tierras (Brandão, Tsikioka y Carvalho, 1999), llevó a la movilización de las comunidades locales para tratar de garantizar su permanencia en el territorio. La Iglesia Católica, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (ver parte 5) y de la presencia antigua de misioneros en la región, desempeñó un papel importante en la organización política y la formación de líderes en estas comunidades.

En 1996, las comunidades negras y los barrios de agricultura familiar unieron sus fuerzas para formar un sindicato autónomo —el Sintravale, Asociación de Trabajadores de la Agricultura Familiar del valle del Ribeira y Litoral Sur de San Pablo— distinguiéndose del antiguo sindicato de trabajadores rurales que representaba a los trabajadores rurales asalariados de las grandes fincas. Al mismo tiempo, un agrónomo de la Coordinación de Asistencia Técnica Integral de la Secretaría de Agricultura del Estado de San Pablo, movilizó a los agricultores de Barra do Turvo y del municipio vecino de Adrianópolis alrededor de la agroforestería, presentada como un modo de agricultura compatible con su permanencia en el Parque. Con el apoyo del Sintravale y de otras organizaciones, un grupo de agricultores de Barra do Turvo y de Adrianópolis realizó una pasantía con Ernst Götsch, agricultor residente en el Estado de Bahía, reputado por sus conocimientos en el manejo de “sistemas agroforestales”, que combinan especies arbóreas con cultivos agrícolas y/o crianza de animales (Souza y Silva, 2013). De vuelta a casa, estos agricultores crearon, en 1996, la Cooperafloresta, Asociación de Agricultores Agroforestales de Barra do Turvo y Adrianópolis. Basada en esta técnica, en sistemas participativos de garantía y en la comercialización colectiva, la Cooperafloresta se convirtió en la mayor asociación de agricultores agroecológicos del valle, reuniendo a más de cien familias (Steenbock, Costa e Silva, Ozelame da Silvia *et al.*, 2013).

La Cooperafloresta contó inicialmente con la participación de los habitantes de las comunidades *quilombolas*, especialmente las mujeres (Telles, 2018). Después de esta fase inicial, los habitantes de ciertas comunidades se distanciaron del Directorio de la Cooperafloresta, dominado según ellos por un nuevo técnico de fuera del municipio, que introdujo especies “tropicales” en las áreas a ser reforestadas, las cuales serían responsables por la aparición de plagas. En forma general, una parte de los habitantes de las comunidades *quilombolas* sintieron la imposición de reglas, por parte de este Directorio, como un ataque a su autonomía, lo que los llevó a retirarse de la Cooperafloresta y a buscar nuevas estrategias para poder permanecer en el territorio.

<sup>9</sup> La Constitución también reconoció a los pueblos indígenas en su artículo 231, otorgándoles derechos para el reconocimiento de sus territorios, lenguas, creencias, costumbres y formas de organización social.

Así, a principios de la década de 2000, líderes de las comunidades negras de Barra do Turvo, incluida Ribeirão Grande y Terra Seca, iniciaron un diálogo sobre la posibilidad de ser reconocidas como remanentes de *quilombo*, del mismo modo que lo habían hecho las comunidades pioneras de Eldorado e Iporanga (Sánchez, 2004). La elección del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, a fines de 2002, y luego la promulgación de un decreto (n° 4887 del año 2003) que “regula el procedimiento para la identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de las tierras ocupadas por remanentes de las comunidades de los *quilombos*” creó condiciones favorables para esta demanda. Estas comunidades comenzaron entonces un largo proceso de movilización política, todavía en curso hoy, que atestiguó su identidad de afrodescendientes y su antigüedad en el territorio, para obtener el título definitivo de propiedad de la tierra.

Paralelamente, a principios de la década de 2000, las comunidades reconocidas como tradicionales se unieron a los barrios de agricultura familiar para exigir la retirada del Parque Jacupiranga. Esta movilización resultó, en 2008, no en la retirada, sino en la reorganización del Parque dentro de una nueva unidad –el Mosaico de Unidades de Conservación de Jacupiranga. En este contexto se definieron los diferentes tipos de unidades de conservación: Reservas de Desarrollo Sostenible, Áreas de Protección Ambiental y Reservas Extractivas, y se criaron consejos gestores tripartitos, compuestos por representantes de las autoridades públicas, de las comunidades y de la sociedad civil (Bim, 2012). Esta reorganización regularizó la presencia de parte del hábitat, flexibilizó las reglas de uso de los recursos y abrió nuevos canales de comunicación entre las autoridades del Mosaico y las comunidades locales, sin por eso haber resuelto todos los conflictos. En general, los habitantes continúan sintiendo los controles del Parque como una amenaza y una forma de violencia que les impide “vivir dignamente de su trabajo”, desconociendo el trabajo de mantenimiento de los ecosistemas que realizan. Desde 2016, los conflictos ambientales y por tierras escalaron nuevamente en la región, debido a la aprobación de medidas legislativas<sup>10</sup> que permiten la privatización de la gestión de las unidades de conservación ambiental en el Estado de San Pablo y a la promoción de mecanismos financieros de la economía verde, tales como la iniciativa global Economía de los Ecosistemas y de la Biodiversidad (*The Economics of Ecosystems and Biodiversity*).

## 4.2. Las identidades políticas y el conflicto central: tierra y territorio

Como resultado de esta historia política y económica, que crio un valor de mercado para la tierra y los recursos naturales locales, el valle del Ribeira está marcado por niveles altos y crecientes (Bim, 2012) de concentración de la tierra<sup>11</sup> y por conflictos que oponen globalmente la élite política y económica regional a los barrios rurales pobres, exponiéndolos a diversos riesgos de expulsión. En estos últimos, existe una diferencia entre las comunidades *quilombolas* reconocidas como tales y los barrios identificados como parte de la agricultura familiar, que no reivindicaron una identidad política o que son de constitución reciente. Los barrios de la agricultura familiar

<sup>10</sup> Proyecto de Ley 249/2013, aprobado por la Asamblea Legislativa el 10 de junio del 2016.

<sup>11</sup> Las pequeñas y medianas propiedades (de menos de 50 hectáreas), que representan el 81% del total, ocupan el 20% del área, mientras que las propiedades muy grandes (de más de 500 hectáreas), representando el 1,8% del total, ocupan el 44% del área (IBGE, 2006).

pueden incluir poblaciones que se auto-identifican como negras, blancas y pardas y, en ciertos barrios antiguos, grupos que se están organizando para su reconocimiento como remanentes de *quilombos*.

A lo largo del proceso de reconocimiento, las comunidades *quilombolas* se organizaron y crearon sus propias asociaciones (condición para el reconocimiento legal), mientras que en los barrios de agricultura familiar, las asociaciones de vecinos no siempre existen, o, cuando existen, no tienen necesariamente legitimidad o representatividad. Las comunidades *quilombolas* se beneficiaron de políticas de acción afirmativa, incluidos contratos aún en vigencia en 2018 de la modalidad de “Donación Simultánea” del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), interrumpido en otros barrios desde 2017. Así, existe una diferencia no solo política sino también económica entre las comunidades “tradicionales” legalmente reconocidas, y los barrios de agricultura familiar.

Además, diferencias de clase pueden ser identificadas dentro de los barrios, entre hacenderos y en ciertos casos agricultores que contratan mano de obra y aquellas personas que venden su fuerza de trabajo, generalmente por pago de salario diario, en la actividad agrícola (mayormente hombres y algunas mujeres) o en el trabajo doméstico (en el caso de las mujeres). La preferencia por el trabajo asalariado puede ser observada incluso en familias que tienen tierra, pero buscan un ingreso monetario, motivadas en general por la compra de bienes de consumo (como coches y electrodomésticos). En particular, en los nuevos barrios pobres de agricultura familiar, pocas familias viven solo de su propia producción. El trabajo asalariado agrícola o no agrícola y una variedad de beneficios sociales –en general obtenidos a través de un arduo trabajo de superación de discriminaciones y obstáculos burocráticos– se combinan con la producción propia, según diferentes lógicas.

Estas diferencias tienden a acentuarse hoy debido a la emergencia de actores, como los hacenderos que demandan indemnizaciones o ajustes en los límites del Parque, y condiciones, como la prevista privatización de la gestión del Parque y cambios en la composición de los consejos gestores de las unidades de conservación. En 2017, “comunidades y pueblos tradicionales del valle del Ribeira” se organizaron en un foro del mismo nombre, buscando mantener su derecho a la tierra y a los recursos naturales, mientras que los barrios de la agricultura familiar estuvieron sujetos a varias influencias, especialmente de hacenderos y grandes terratenientes que buscaron convencerlos a unirse a su *lobby* por la cancelación de las negociaciones con el Parque, con la expectativa de acceso a indemnizaciones.

### **4.3. El conflicto encubierto: desigualdad y violencia de género**

Ante estas diferencias y ese conflicto central –entre modernización capitalista y defensa de los modos de vida “tradicionales” y autónomos, y por el acceso a la tierra y los recursos– las voces de las mujeres y las desigualdades de género tienden a pasar desapercibidas (Hillenkamp y Nobre, 2018). Estas desigualdades se basan en una división sexual del trabajo que en general asigna a las mujeres el trabajo doméstico y la responsabilidad de cuidar de las personas, de los animales y de los cultivos en los espacios cerca de la casa (patio, huerta, gallinero, etc.) y a los hombres, el trabajo agrícola y no agrícola que involucra desplazamientos más largos (en pastizales, *sertões*, mercados, etc.). Esta división se justifica por la presunta “pesadez” de las tareas realizadas por los hombres, mientras que las mujeres proporcionarían un tra-

bajo “liviano”. Sin embargo, el contenido de las tareas masculinas y femeninas varía localmente, poniendo de relieve la determinación social y no biológica de esta división (Paulilo, 1987). Por lo tanto, la división sexual del trabajo expresa sobre todo la menor valoración del trabajo femenino, que genera poco o ningún ingreso en dinero y, por lo tanto, es en gran parte invisible (Telles, 2018). También se traduce en una mayor carga de trabajo para las mujeres, como sugieren los indicadores nacionales, con un promedio estimado de 55,3 horas de trabajo por semana para las mujeres rurales, en comparación con 47,7 horas en el caso de los hombres (IPEA, 2011: 33, *apud* Hora y Butto, 2014: 38).

Esta división se sustenta en una representación social que asocia la feminidad con la modestia y la sumisión y la masculinidad con la virilidad, requiriendo de los hombres muestras permanentes de su fuerza física y de su autoridad (Da Costa y Marin, 2018), como lo vislumbramos en nuestra visita al Bela Vista. El mantenimiento de esta división exige además formas de violencia, simbólica o física, hacia las mujeres, como el control de su movilidad, la depreciación de su trabajo, la descalificación de sus conocimientos, la violencia doméstica, etc. Así, el hecho de que la presidenta de la asociación de la comunidad de Ribeirão Grande y Terra Seca sea una mujer sigue siendo una excepción y debe estar acompañado, según ella, por una renegociación general de la responsabilidad del trabajo de cuidado para permitir la participación económica y política de todas las mujeres en los asuntos de la comunidad.

De la misma manera, el Sintravale, las asociaciones de vecinos y la Cooperafloresta, siguen siendo espacios de participación masculina. En el caso de la Cooperafloresta, los testimonios de las agricultoras revelan el papel que desempeñaron en la fundación de la Asociación y en la gestión cotidiana de los sistemas agroforestales, especialmente durante los períodos de disminución de las ventas o de tensiones con el Directorio. Sin embargo, hay muy pocas mujeres en los espacios de toma de decisiones, sea a nivel del Directorio, del Concejo o de la administración. En general, “el debate de género no es un tema en la Cooperafloresta”, como lo resumió una de nuestras interlocutoras. En el mismo sentido, ante la consolidación del grupo de agricultoras agroecológicas vinculado a la SOF en el barrio de Bela Vista, el presidente de la asociación local de vecinos recordó que “la asociación tiene que ser una sola” y que los problemas de la tierra, de las infraestructuras y de la gestión del agua son de su exclusiva competencia. Durante una visita anterior, en 2017, él había designado a la iglesia y al salón de la Pastoral de los Niños como el lugar apropiado para el grupo de mujeres, donde pueden lidiar con las cuestiones de alimentación de los niños y hacer el seguimiento de los embarazos.

Finalmente, lejos de demostrar la persistencia de un modelo familiar tradicional, este tipo de reafirmación de los roles de género es, por el contrario, parte de un contexto de transformación de las estructuras familiares campesinas, marcado por el aumento en el número de hogares encabezados por mujeres, por nuevas estrategias de multiactividad y multiresidencia, y por migraciones, especialmente de mujeres adultas. En Barra do Turvo, la proporción de mujeres y hombres es de 47,6% y 52,4%, respectivamente, y el 36,7% de los hogares están dirigidos por mujeres<sup>12</sup>. A nivel nacional, la proporción de establecimientos agropecuarios dirigidos por mujeres cre-

---

<sup>12</sup> Atlas de Desarrollo Humano de Brasil 2010, [http://atlasbrasil.org.br/2013/es/perfil\\_m/barra-do-turvo\\_sp](http://atlasbrasil.org.br/2013/es/perfil_m/barra-do-turvo_sp) y Estadísticas de Género del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, <http://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0>, acceso 19/12/2018.

ció de 12,6% en 2006 a 18,7% en 2017 (IBGE, 2018). La situación de las mujeres de la red de agricultoras agroecológicas refleja estas tendencias: algunas están casadas, otras están solas con sus hijos, a menudo de padres diferentes, y muchas tienen 35 años de edad o más. La mayoría de las mujeres jóvenes se encuentran en las afueras de la metrópoli vecina de Curitiba, donde hacen o buscan trabajos de baja cualificación (limpieza o venta) antes de, a veces, regresar a su comunidad. Por lo tanto, la afirmación de un modelo familiar tradicional que justifica los roles de género es una representación conservadora de la realidad y una estrategia defensiva frente a estas transformaciones, mucho más que una descripción de la misma.

En suma, la posibilidad para una mayor autonomía de las agricultoras depende del entrelazamiento de relaciones sociales y de procesos de cambio que caracterizan al territorio de Barra do Turvo, algunos de los cuales son contradictorios.

Espacios de acción tan diversos como la Pastoral de los Niños, las asociaciones locales y los grupos de productoras, junto con algunas transformaciones de las estructuras familiares y comunitarias y la intervención de agentes locales o externos abren brechas de participación de las mujeres y de renegociación de las relaciones de género. Al mismo tiempo, estas renegociaciones están limitadas por representaciones conservadoras de la familia y de la comunidad, que las ocultan o incluso se oponen a ellas. La prioridad otorgada por los *quilombolas* y los agricultores familiares a la defensa de su territorio y de su autonomía en la definición de sus modos de vida es otro factor que puede, paradójicamente, restringir la autonomía de las mujeres, en la medida que mantiene la cuestión del género en el segundo plano, en nombre de la unidad necesaria frente a enemigos externos –Parque, grandes terratenientes, actores de la economía verde, etc. Esta prioridad se impone en las comunidades *quilombolas* y de la agricultura familiar, más allá de las diferencias políticas, de modelo agrícola y económicas que pueden existir entre ellas.

En este contexto, la red de agricultoras agroecológicas apoyada por la SOF representa una propuesta de unión de las mujeres, para hacer reconocer su contribución en defensa de una agricultura sostenible y del derecho a la tierra y al territorio y, sobre esta base, renegociar sus atribuciones a nivel de la familia, de la comunidad y de los espacios de participación social. Esta propuesta dio lugar a varias intervenciones de la ONG. Al nivel de los barrios, la SOF buscó alentar y ayudar a los grupos de mujeres a asumir nuevas responsabilidades en sus barrios. Algunas se involucraron en conflictos por tierras o medioambientales locales, obteniendo resultados, como la instalación de fosas sépticas, pero también haciendo frente a resistencias. Al nivel político, la SOF fomentó la participación de las agricultoras en seminarios regionales o nacionales del movimiento de agroecología feminista, donde fueron junto con la equipo de la ONG y con su apoyo financiero. En ciertas ocasiones, la SOF reunió a las mujeres que trabajan de manera regular en la sede de la Cooperafloresta, sin por eso que se modifique por el momento la estructura en la toma de decisiones de la Asociación. En 2018, los grupos de productoras designaron representantes que se reúnen mensualmente en la parroquia, en el centro del municipio –lo que implica largos trayectos y gastos en transporte público– para realizar las actividades de coordinación vinculadas a las ventas a los grupos de consumo responsable. En algunos casos, estas reuniones se realizaron sin participación financiera de la ONG y sin presencia de su equipo, pero no siempre consiguieron solucionar todas las cuestiones operacionales (elaboración de la oferta, acuerdos sobre los precios, organización del transporte, distribución de los ingresos, etc.). Como lo ilustró el relato de la reunión

de uno de los grupos (sección 3.3), estas cuestiones involucran criterios complejos de juicio moral –equidad, necesidad, solidaridad– que son tanto más difíciles de resolver cuando se pasa del nivel de grupo al de la red. La autonomía de las agricultoras frente a la SOF es un proceso lento en el que la organización local puede tanto fortalecerse como debilitarse.

## **5. La agroecología feminista: historia de la constitución de sus sujetos políticos**

La propuesta hecha por la SOF en Barra do Turvo y en los otros municipios del Valle del Ribeira a partir de 2015 combina la promoción de la agroecología con los objetivos de igualdad de género y autonomía de las mujeres. Esta propuesta se formó en el seno de espacios militantes, reuniendo a dirigentes de movimientos de mujeres rurales y activistas feministas, que ocupan cargos en las ONGs, en universidades o en organismos públicos. A partir del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Alianza Nacional de Agroecología (en adelante ANA), fundado en el 2002, estas activistas desarrollaron acciones similares a la de la SOF en el valle del Ribeira en varios territorios del país. Para comprender el contenido de la agroecología feminista y la manera en que este proyecto político se inscribe en las relaciones sociales en diferentes niveles, es necesario volver sobre este recorrido.

### **5.1. Movimientos de mujeres rurales y agricultura alternativa en la “redemocratización”**

La redemocratización de los años 1980, que abrió el camino para la expresión de nuevos sujetos políticos y la demanda de derechos sociales, puede considerarse como punto de partida de este recorrido. En este contexto, las campesinas reivindicaron el estatus de trabajadoras rurales y el acceso a beneficios sociales. La segunda mitad de la década de 1970 había visto la afirmación de un nuevo sindicalismo, que buscaba su autonomía frente a los gobiernos militares. En las zonas rurales, la principal organización sindical de la época, la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (en adelante CONTAG), puso la reforma agraria en su agenda durante el Congreso de 1979. La Iglesia católica, progresista en Brasil durante esos años, también se posicionó contra la dictadura y creó en 1975, la Comisión Pastoral de la Tierra, que desempeñó un papel clave en la organización local de los trabajadores rurales y, más tarde, en la formación del Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil (MST).

Las mujeres, sin embargo, habían sido hasta ese momento excluidas de los sindicatos de trabajadores rurales, o más bien, como ironiza una dirigente, estaban muy presentes en las cocinas de los sindicatos. En la década de 1980, estas mujeres, apoyándose en el naciente movimiento feminista en América Latina, comenzaron a organizarse localmente en redes y movimientos autónomos: Movimiento de las Mujeres Agricultoras del Estado de Santa Catarina, en 1984; Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales de Pernambuco, en 1986 y del Nordeste, en 1987; seguido por muchos otros (Siliprandi, 2009; Jalil, 2013; Butto, 2017). Fuera del movimiento sindical, las organizaciones de mujeres rurales también surgieron en este período, como es el caso de la Articulación de Mujeres Rompedoras de Coco, que desafió la privatización de los palmerales y la Organización de las Mujeres Quilombolas, que participó en la lucha del movimiento rural negro por el derecho a la tierra. También

se crearon importantes movimientos rurales mixtos, como el MST, en 1984. Centrado en la reforma agraria, este último negó al principio cualquier debate sobre las relaciones de género, considerando que debilitaría el objetivo prioritario de la lucha de clases (Siliprandi, 2009). En 1985, las trabajadoras rurales obtuvieron el derecho a la sindicalización y en 1988, la Constitución reconoció el derecho a la protección social de los trabajadores y de las trabajadoras del sector rural.

Orientados hacia los derechos sociales y la reforma agraria, los movimientos rurales no participaron en los primeros Encuentros Brasileños de Agricultura Alternativa, organizados en 1981 y 1983 por la Federación de Asociaciones de Ingenieros Agrónomos de Brasil y la Federación de Estudiantes de Agronomía de Brasil. De índole técnica, estos encuentros formularon las primeras críticas de los daños medioambientales causados por el modelo agrícola dominante y propusieron otros métodos (Luzzi, 2007). Al mismo tiempo, en 1983, una gran ONG brasileña activa en la educación popular, la Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educativa, inició un Proyecto de Tecnologías Alternativas (PTA), creando, en 1989, una red de ONGs del mismo nombre (red PTA) (*ibid.*). Ese mismo año se creó el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo, que adoptó en su sigla el concepto de la agroecología como “una agricultura alternativa con base científica” propuesta por Miguel Altieri, profesor de origen chileno que trabajaba en la Universidad de Berkeley (Altieri, 1987).

## 5.2. Agricultura familiar y género en la agenda neoliberal

A fines de la década de 1980, la proliferación de nuevas ideas, nuevos sujetos y los derechos adquiridos en el contexto de apertura democrática, se enfrentaron a las políticas de ajuste estructural que respondieron a la crisis de la deuda pública externa y la hiperinflación. Durante la década de 1990, las organizaciones y movimientos rurales continuaron su estructuración y sus reivindicaciones, pero frente a un marco referencial de políticas públicas orientadas por los preceptos neoliberales, en particular por la apertura comercial que afectó negativamente a los pequeños agricultores (Grisa y Schneider, 2014).

En este contexto, no obstante, la agenda de las mujeres rurales continuó progresando, con la creación, en 1993, de la Vía Campesina, que posicionó la reforma agraria y la soberanía alimentaria en la agenda internacional, vinculándolas a la problemática de la organización de las mujeres (Siliprandi, 2009). En 1994, las organizaciones sindicales rurales brasileñas, incluyendo los movimientos de mujeres trabajadoras rurales (Jalil, 2013), organizaron el primer *Gritos de la Tierra Brasil*, un evento federador de los movimientos rurales en el curso del cual diversas reivindicaciones fueron presentadas al gobierno. Entre las cuales, las mujeres rurales pidieron formas diferenciadas de crédito y asistencia técnica (Siliprandi, 2009).

En 1995, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso reconoció la categoría de agricultura familiar y creó el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar. Por un lado, este programa marcó un avance decisivo en el reconocimiento político de los que hasta entonces eran solo “pequeños productores”; por otro lado, ratificó el presupuesto de una unidad de producción familiar, encubriendo nuevamente las desigualdades de género y generacionales. Además, este programa priorizó el segmento superior de la categoría de agricultura familiar, adoptando como medida principal el crédito rural, diseñado como

una manera de consolidar las explotaciones “en transición” insertándolas a los mercados agrícolas (Grisa y Schneider, 2014). Durante este período, el gobierno también intensificó su política de consolidación de la reforma agraria (92.900 familias establecidas en 1997) (*ibid.*) mientras que las mujeres afirmaron su lugar en el seno del MST creando, en 1996, el Colectivo Nacional de Mujeres del MST (Siliprandi, 2009).

En los años siguientes, la agenda política abierta por los movimientos de las trabajadoras rurales, las alianzas con los movimientos sociales mixtos, los límites comprobados del concepto de *unidad* de producción familiar, combinados con la presión de los financiadores internacionales para incluir el género en los proyectos de desarrollo, condujeron a una inflexión en el debate sobre la agricultura familiar. Entre 1996 y 1998, la SOF coordinó un seminario nacional intitulado “Género y agricultura familiar” y aseguró el papel de asesora para la red PTA en la región sureste de Brasil, dando nacimiento a un grupo de trabajo sobre el género dentro de esta red. En estos espacios, la presunción de la existencia de intereses comunes de la unidad de producción familiar que se expresaría en la voz del padre o del marido fue cuestionada y también fueron discutidas las desigualdades de poder dentro de las familias y de las organizaciones campesinas, la división sexual del trabajo y de conocimientos, como también las propuestas de las agricultoras (Nobre, 2015). Sobre esta base, una alianza política se estableció entre el personal de las ONG de esta red y las agricultoras, militantes de movimientos de mujeres rurales (*ibid.*).

Durante este mismo período, los movimientos de mujeres rurales se reforzaron con la organización de una importante agrupación conocida como la Marcha de las Margaridas<sup>13</sup>. Coordinada por la central sindical CONTAG, la primera marcha tuvo lugar en Brasilia en el año 2000, reunió alrededor de 20.000 participantes y condujo a que los títulos de propiedad de los establecimientos de la reforma agraria sean obligatoriamente establecidos a nombre de la pareja y no del “Jefe de familia”.

Al final de los años 1990, fueron creadas varias iniciativas y redes para reunir a los diferentes segmentos de la agroecología, conduciendo a la creación de la ANA (Alianza Nacional de Agroecología), en el año 2002 en Río de Janeiro. La creación de la ANA marcó una ampliación de las alianzas entre movimientos rurales, incluyendo a mujeres, personal de las ONG, funcionarios/-as públicos/-as, profesores/-as universitarios/-as y consumidores/-as (Siliprandi, 2009). Lejos del enfoque tecnocrático de la década de 1980, la agroecología se concibió a partir de este momento, y en particular por parte de los movimientos rurales, como un proyecto “contra hegemónico al sistema dominante”, poniendo a la justicia social en el centro del debate (Luzzi, 2007). Considerando que el sistema dominante no es solo capitalista sino también patriarcal, las mujeres militantes se organizaron dentro de un grupo de trabajo transversal, que apuntaba a cuestionar todas las desigualdades de género, incluso en el seno de la ANA. Al mismo tiempo, la soberanía alimentaria y la agroecología ingresaron en la agenda de algunos movimientos feministas, particularmente la Marcha Mundial de las Mujeres (Masson y Conway, 2017), una organización transnacional nacida en Quebec en el año 2000, cuya Secretaría Internacional tuvo sede en la SOF entre 2006 y 2013.

<sup>13</sup> En memoria de la dirigente sindical Margarida Alves, asesinada en 1983.

### 5.3. Agroecología feminista y políticas públicas de los gobiernos “progresistas”

A partir de 2003, el campo emergente de la agroecología feminista se vio reforzado con la llegada al poder de los gobiernos “progresistas” de Lula y de Dilma Rousseff (enero de 2013–agosto de 2016). En general, los movimientos sociales y sus aliados accedieron a nuevos espacios de diálogo con el gobierno y participaron en la elaboración y la gestión de nuevas políticas públicas, incluso a través de la designación de funcionarios públicos provenientes de sus filas. Así, durante este período, la consolidación y expansión de los movimientos sociales, en especial de mujeres rurales, estuvieron estrechamente vinculadas a las políticas públicas (Filipak, 2017). Sin embargo, esta apertura no significó que el conjunto de las estructuras de desigualdad socioeconómica fuera cuestionado. El modelo agrícola, en particular, siguió siendo dual –escindido entre las áreas de agricultura patronal y familiar (Sabourin, 2014). En nombre de la gubernamentalidad, los avances a favor de la agricultura familiar en general, y de la reforma agraria en particular, siguieron siendo globalmente limitados por la preservación de los intereses de los grandes hacendados y terratenientes (Sánchez y Turatti, 2012).

Inicialmente, las políticas a favor de la agricultura familiar interesaron al PAA (Programa de Adquisición de Alimentos) y a la política de ATER (Asistencia Técnica y Extensión Rural). Creado en 2003, el PAA movilizó importantes recursos –hasta 839 millones de reales, aproximadamente 220 millones dólares en 2012– que contribuyeron a incrementar y estabilizar los ingresos de los agricultores familiares. A pesar de los límites, planteados sobre todo por las normas sanitarias del sector agroalimentario, las asociaciones y redes de agricultoras se beneficiaron con este programa, generando ingresos propios y valorizando la diversidad de producciones regionales (SOF, 2016).

En 2003, se implementó una nueva modalidad denominada “pública y universal” de la política de ATER. Destinada a superar el sesgo histórico de asistencia técnica para las grandes explotaciones agrícolas, esta política mostró como objetivo la lucha contra la pobreza rural y la reducción de las desigualdades, incluso de género. Sin embargo, en un primer momento, la nueva política de ATER no rompió ni con el paradigma de la modernización ni con su sesgo masculino. Es así que, en 2006, la política beneficiaba al 22% de las unidades agrícolas familiares dirigidas por hombres y sólo al 11% de las dirigidas por mujeres. La demanda de los movimientos de mujeres rurales, apoyada por las ONGs, buscando recibir asistencia técnica para la producción destinada al autoconsumo (huertas y patios productivos) era considerada como evidencia de un verdadero “atraso” (Nobre, 2012).

En 2010, los movimientos de mujeres rurales obtuvieron un avance decisivo con la creación de la Dirección de Políticas para las Mujeres Rurales en el seno del Ministerio de Desarrollo Agrícola, teniendo su propio presupuesto<sup>14</sup> y su propio equipo y dirigido por una militante. En este contexto, se creó una nueva modalidad de ATER destinada específicamente a las mujeres y se aprobaron cuotas de participación de las mismas (como agentes de la política y como beneficiarias) en una modalidad, también nueva, de ATER agroecológica. La ANA desempeñó un rol central en la construcción de estas políticas públicas, organizando reuniones regionales y nacionales

---

<sup>14</sup> Entre 2003 y 2013, el DPMR ejecutó un presupuesto de alrededor de 300 millones de reales (equivalente a 93 millones de dólares) (Hora y Butto, 2014: 28).

en las que se elaboraron las propuestas. Al mismo tiempo, según las integrantes del Grupo de Trabajo de Mujeres de la ANA, las más fuertes objeciones a la definición de las cuotas para las mujeres vinieron del interior de la ANA, y no del gobierno. La movilización de las mujeres rurales en el seno de la Marcha de las Margaridas, llevada a cabo en Brasilia en el año 2000 y luego en 2003, 2007, 2011 y 2015, fue fundamental en esta relación de fuerza (Moreira, Fereira y Siliprandi, 2018). Contribuyó a la promulgación, en 2012, de la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica con una directiva de género y el acompañamiento de un Comité Nacional compuesto por representantes de los órganos de gobierno y de la sociedad civil. Las problemáticas del acceso de las agricultoras a una política de ATER agroecológica de calidad, incluyendo la formación de agentes, de la sistematización y del intercambio de experiencias, de la visibilización de la producción agroecológica de las mujeres y del mejoramiento del acceso a los mercados públicos y a la comercialización, fueron debatidas en estos espacios (*ibid.*).

Como resultado de esta evolución de los debates, una política de apoyo a patios productivos fue promulgada por la Presidenta Dilma Rousseff en el 2015, pero no fue implementada debido a la destitución de la Presidenta al año siguiente. A pesar de esto, esta política generó un proyecto de investigación participativa, cuyo objetivo era proporcionarle los datos necesarios. Esta investigación la realizó el Grupo de Trabajo de las Mujeres de la ANA a través de Libretas agroecológicas en las que las agricultoras, de diferentes partes del país anotaron durante un año su producción de alimentos según cuatro categorías: consumidos por la familia, vendidos, trocados y donados (Telles, Jalil, Cardoso *et al.*, 2018; Alves, Alvarenga, Cardoso *et al.*, 2018)<sup>15</sup>. La estimación del equivalente monetario de esta producción puso en evidencia un valor mensual del orden de los 683 reales (en septiembre de 2017) o 940 reales (en marzo de 2018), comparable al salario mínimo legal de 954 reales (en 2018). Las libretas también demostraron la importancia de la producción no monetaria de las mujeres (el 51% del número total de registros en las libretas y el 28% del valor monetario equivalente corresponde al consumo de la familia) y la diversidad de la producción en las huertas (por ejemplo, en el estado de Bahía, el número promedio de productos por agricultora fue de 33)<sup>16</sup>.

Globalmente, el balance de estas políticas es polémico. Para muchas campesinas y trabajadoras rurales, representó un avance indiscutible, aportando políticas inéditas, ejecutadas localmente por ONGs militantes de la agroecología feminista. Es en este contexto que el equipo de la SOF, compuesto inicialmente por cuatro agrónomas y una especialista en gestión medioambiental, comenzó su intervención en el valle del Ribeira en 2015, en calidad de entidad ejecutora de la política de ATER mujeres. Sin embargo, estas políticas siguieron siendo “puntuales”, “limitadas” y “burocráticas” a los ojos de algunas militantes. Según este punto de vista, fueron políticas experimentales más que universales<sup>17</sup>. Las relaciones de algunos movimientos rurales y ONGs con el gobierno, incluso con militantes que ocupaban puestos de dirección en

<sup>15</sup> Se distribuyeron 1.000 libretas a través de la red movilizadora por este Grupo, con el objetivo de recuperar 250. Finalmente, 264 fueron completadas y reintegradas.

<sup>16</sup> Según los datos preliminares presentados durante el Seminario nacional “Feminismo y Agroecología: repensando una economía a partir de las libretas agroecológicas”, realizado en Recife del 12 al 14 de noviembre de 2018.

<sup>17</sup> La política de ATER, benefició entre 2004 y 2013 a 56.400 mujeres, con un presupuesto de 32,3 millones de reales (alrededor de 10 millones de dólares).

la Dirección de Políticas para las Mujeres Rurales, a veces fueron tensas, necesitando un juego sutil de “presión y de solidaridad”, según la expresión de una militante.

El legado más importante de este período es probablemente el de haber contribuido a la consolidación de un enfoque feminista de la agroecología, resumido en la consigna del Grupo de Mujeres de la ANA, “sin feminismo, no hay agroecología”. Esta consolidación fue ayudada por la apertura de espacios de co-construcción de políticas públicas, que le permitieron fortalecer sus vínculos con las agricultoras en diferentes territorios. Más allá de este período, la agroecología feminista es el fruto de un largo proceso de organización y construcción de la agenda política por parte de las mujeres rurales y sus aliadas. En las últimas cuatro décadas, esta agenda pasó por varias etapas: por un pedido de reconocimiento de las “trabajadoras rurales”, portadoras de derechos sociales; por un cuestionamiento de las relaciones de género en la agricultura familiar; por una politización de la seguridad y la soberanía alimentaria; y por una afirmación de la presencia de las mujeres en la agroecología y de la importancia de su trabajo no solo para la comercialización, sino también para el autoconsumo y los intercambios no monetarios. De esta forma, estas mujeres desarrollaron un proyecto político, que involucra la búsqueda no solamente de técnicas, sino también de relaciones de producción social y ecológicamente sostenibles. Este proyecto las une oponiéndolas, por un lado, al agronegocio que representa la posición conservadora en materia de modernización agrícola y, por otro lado, a la agricultura familiar y a la agroecología ciegas al género. Esta unión les permitió afirmar colectivamente el valor de su trabajo agrícola y de cuidado e influir en relaciones de poder, del nivel nacional hacia el nivel local.

La toma del poder de Michel Temer, en agosto de 2016, seguida por la elección del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, en octubre de 2018, pone fin a las políticas públicas orientadas a la agroecología feminista y a la agricultura familiar<sup>18</sup>. Este escenario debilita a las ONGs y a los movimientos de mujeres rurales obligándolos a recurrir a fuentes alternativas que cuentan a menudo con menor financiamiento –gobiernos locales o agencias de cooperación internacional, por ejemplo, en el caso de la SOF– además de que algunas militantes sufrieron amenazas. Sin embargo, las articulaciones y el proyecto político construidos desde la década de 1980 subsisten en este escenario y las militantes se centran en los medios para continuar con su organización a nivel local y nacional.

## 6. Consideraciones finales: ¿construyendo autonomía?

La experiencia del movimiento brasileño de agroecología feminista y de la red de agricultoras agroecológicas de Barra do Turvo proporciona elementos de reflexión empírica y teórica sobre el alcance transformador de una economía popular de tipo solidaria frente a las crecientes desigualdades y daños ambientales. Esta experiencia muestra la posibilidad de una organización política, económica y social al servicio de un modo más sostenible de reproducción de la vida y de una mayor autonomía para las mujeres. Pero también y, quizás lo más importante, esta experiencia ilustra

<sup>18</sup> Los recursos del PAA, que comenzaron a disminuir desde 2012, cayeron un 66% entre 2016 y 2017, de 439 millones a 150 millones de reales, según datos publicados en 2018 por el Ministerio de Desarrollo Social.

la complejidad de este tipo de proceso, debido a la interconexión de los niveles de acción y de las relaciones sociales que implica.

El objetivo de autonomía de las mujeres, planteado por el movimiento feminista brasileño de agroecología, es un concepto heurístico para abordar el alcance transformador de este tipo de iniciativas, siempre que tenga en cuenta la vulnerabilidad. Condiciones de vida precarias, ingresos bajos e inestables, amenazas a las comunidades y su acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como políticas públicas frágiles, son algunas de las condiciones en las que se dan estas experiencias. A partir de este reconocimiento, mi enfoque de la autonomía contempla las interdependencias en distintos niveles y el trabajo de cuidado, llevado a cabo principalmente por mujeres, para enfrentar la vulnerabilidad. El concepto de autonomía así definido me es útil para comprender los procesos de transformación y emancipación social desde el significado que las actrices y actores dan a sus prácticas y a sus compromisos. Así, las prácticas de cuidado, sea dentro de relaciones familiares, de un grupo de productoras, o incluso en el mantenimiento de sistemas agroforestales, pueden ser generadoras de autonomía, siempre que se inserten en relaciones igualitarias y creen capacidades individuales o colectivas de diferentes tipos (financieras, técnicas, de toma de decisiones, etc.)

El enfoque de la autonomía también requiere tener en cuenta las interdependencias, interpersonales y sociales, construidas en niveles más amplios. Al nivel nacional, volver sobre la larga historia del movimiento brasileño de agroecología feminista me permite comprender la formación de sujetos políticos frente a diferentes opositores, en el sector de agronegocios y dentro del propio movimiento agroecológico. Este nivel de análisis revela también que la formación de sujetos políticos es inseparable del reconocimiento por parte del Estado, de la construcción de políticas públicas y del desarrollo de redes y prácticas locales. Al nivel territorial, la historia política y socioeconómica del Valle do Ribeira proporciona el telón de fondo necesario para comprender cómo sujetos emergentes, como la red de agricultoras agroecológicas en Barra do Turvo, se insertan en las estructuras sociales y en los conflictos locales por la tierra y el medio ambiente y tratan de posicionarse dentro de ellos. Tal enfoque pone de relieve las discrepancias, o incluso la competencia, que pueden existir entre los procesos de renegociación de las relaciones étnicas, de clase y de género, como, por ejemplo, cuando la prioridad dada a la lucha por el territorio justifica el mantenimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres.

Finalmente, el enfoque sustantivo de la economía (Polanyi 2017 [1944] y 1967 [1957]), basado en una interpretación de los principios de integración económica como tipos de interdependencia, me ayuda a aclarar el lugar de estas iniciativas en el tejido social y político y a evaluar de forma matizada su alcance transformador. Este enfoque muestra el entrelazamiento de diferentes modalidades de los principios de reciprocidad, redistribución, *householding* y mercado en la construcción de autonomía. Se aleja tanto de la concepción liberal dominante que reduce la autonomía de las mujeres a su inserción en los mercados, como de una visión autárquica de la autonomía que, por el contrario, apuesta solamente a distanciarse del mercado. Finalmente, considero que el marco teórico de la economía sustantiva, reinterpretado a la luz del cuidado, es necesario para una posición epistemológica que haga justicia al potencial transformador, pero también a la complejidad y a las dificultades encontradas por las actrices y los actores de las iniciativas de economía popular solidaria.

## 7. Referencias bibliográficas

- Altieri, Miguel (Ed.) (1987). *Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture*. Boulder: Westview Press.
- Alves, Luciana; Alvarenga, Camila; Cardoso, Elisabeth; *et al.* (2018). *Caderneta agroecológica e os quintais: Sistematização da produção das mulheres rurais no Brasil*. Minas Gerais: Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata.
- Bernini, Carina (2015). *A Produção da “Natureza Conservada” na Sociedade Moderna: Uma análise do Mosaico do Jacupiranga, Vale do Ribeira-SP*. Tesis doctoral. Departamento de Geografia. Universidad de São Paulo.
- Bim, Ocimar (2012). *Mosaico do Jacupiranga – Vale do Ribeira, São Paulo: conservação, conflitos e soluções socioambientais*. Tesis de Maestría. Departamento de Geografia. Universidad de São Paulo.
- Brandão, Carlos; Tsikioka Crismere Gadelha; Carvalho Maria Celina (1999), “O cerco do verde: o olhar dos outros sobre a questão do ambiente”. *Ambiente & Sociedade*, 5: 155-180.
- Butto, Andrea Lorena (2017). *Movimentos sociais de mulheres rurais no Brasil: a construção do sujeito feminista*. Tesis doctoral. Departamento de Sociologia. Universidade Federal Pernambuco.
- Carcelle, Sébastien (2019). “Encontrar o sol sem perder o meu norte? Cosmologia da homeopatia rural no Brasil”, *Acte des Journées des jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales: regards croisés France-Brésil*, Brasília: Universidad Nacional de Brasília, Fundación Alexandre de Gusmão y Embajada de Francia en Brasil.
- Cândido, Antônio (1964). *Os Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e as transformações dos seus meios de vida*. São Paulo: Duas Cidades.
- Carrasco, Cristina (2014). *Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y política*. Madrid: La Oveja Roja.
- Centro de Trabalho Indigenista (2015). *Atlas das Terras Guarani no sul e sudeste do Brasil 2015*, São Paulo, Centro de Trabalho Indigenista.
- Da Costa, Cassiane; Marin Joel Orlando (Eds.) (2018). *Gênero e Campesinato no Sul do Brasil: dominação masculina e transformação*. Curitiba: Editora CRV.
- Delphy, Christine (1998). *L’ennemi principal: économie politique du patriarcat* (tome 1). Paris, Syllepse.
- Federici, Silvia (2013). *Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Filipak, Alexandra (2017). *Políticas públicas para mulheres rurais no Brasil (2003-2015): análise a partir da percepção de mulheres rurais e de movimentos sociais mistos*. Tesis doctoral. Departamento de Ciências Sociais. Universidade Estadual Paulista.
- Fraser, Nancy (2013). “Marchandisation, protection sociale, émancipation: vers une conception néo-polanyienne de la crise capitaliste”, en I. Hillenkamp y J.-L. Laville, *op. cit.*: 39-63.
- Freire, Paulo (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente*. São Paulo: Paz e Terra.
- Grisa, Catia; Schneider, Sergio (2014). “Três Gerações de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar e Formas de Interação entre Sociedade e Estado no Brasil”. *Revista de Economia e Sociologia Rural (Piracicaba)*, 52, nº 1: 125-146.
- Hillenkamp, Isabelle (2014). *La economía solidaria en Bolivia. Entre mercado y democracia*. La Paz: CIDES-UMSA, IRD, Plural.

- Hillenkamp, Isabelle (2015). “Solidarity Economy for Development and Women’s Emancipation: Lessons from Bolivia”. *Development and Change*, 46(5): 1133-1158.
- Hillenkamp, Isabelle; Laville, Jean-Louis (Eds.) (2013). *Socioéconomie et démocratie. L’actualité de Karl Polanyi*. Toulouse: Erès.
- Hillenkamp, Isabelle; Servet, Jean-Michel (Eds.) (2015). *Le Marché autrement. Marchés réels et marché fantasmé*. Paris: Classiques Garnier.
- Hillenkamp, Isabelle; Nobre, Miriam (2018). “Agroecologia e feminismo no Vale do Ribeira: contribuição para o debate sobre reprodução social”. *Temáticas (Unicamp)*, 52: 167-194.
- Hirata, Helena; Kergoat, Danièle (2007). “Novas configurações da divisão sexual do trabalho”, *Cadernos de Pesquisa*, 37(132): 595-609.
- Hora, Karla; Butto Andrea (2014). “Políticas públicas para mulheres rurais no contexto dos Territórios da Cidadania”, em Andrea Butto, Conceição Dantas, Elisângela Costa Bezerra, et al. (Eds.), *Mulheres rurais e autonomia. Formação e articulação para efetivar políticas públicas nos territórios da cidadania*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 14-45.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2006). *Censo Agropecuário 2006: agricultura familiar. Resultados por municípios*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- (2018). *Censo Agropecuário 2017: resultados preliminares*. Brasília: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2011). *Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça*. Brasília: IPEA.
- Instituto Sócio Ambiental (ISA) (2016). *Terras de Quilombo e Unidades de Conservação: Corredor Socioambiental do Vale do Ribeira*. São Paulo: ISA.
- Jalil, Laécia (2013). *As Flores e os Frutos da luta: O significado da organização e da participação política para as Mulheres Trabalhadoras Rurais*. Tesis doctoral. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
- Luzzi, Nilsa (2007). *O debate agroecológico no Brasil: uma construção a partir de diferentes atores sociais*. Tesis de Maestría. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
- Marques, Gláucia; Nobre, Miriam ; Moreno, Renata ; et al. (2018). *Práticas feministas de transformação da economia. Autonomia das mulheres e agroecologia no Vale do Ribeira*. São Paulo: Sempreviva Organização Feminista.
- Masson, Dominique; Conway, Janet (2017). “La Marche mondiale des femmes et la souveraineté alimentaire comme nouvel enjeu féministe”. *Nouvelles Questions Féministes*, 36, n° 1: 32-47.
- Moreira, Sarah Luiza; Ferreira, Ana Paula; Siliprandi, Emma (2018). “Memórias das mulheres na agroecologia do Brasil”, em Gloria Patricia Zuluaga, Georgina Catacora-Vargas y Emma Siliprandi (Eds.), *Agroecología en femenino. Reflexiones a partir de nuestras experiencias*. La Paz-Bolivia: SOCLA, CLACSO, 61-74.
- Nobre, Miriam (2012). “Censo Agropecuário 2006 – Brasil: uma análise de gênero”, em Andrea Butto, Isolda Dantas y Karla Hora (Eds.), *As mulheres nas estatísticas agropecuárias: experiências em países do Sul*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 43-120.
- (2015). “Economía solidaria, agroecología y feminismo: prácticas para la autonomía en la organización del trabajo y de la vida”, em Christine Verschuur, Isabelle Guérin y Isabelle Hillenkamp (Eds.), *Une économie solidaire peut-elle être féministe ? Homo oeconomicus, mulher solidaria*, Paris: L’Harmattan, 273-294.
- Paulilo, Maria Ignez (1987). “O Peso do Trabalho Leve”, *Revista Ciência Hoje*, 5, 28.

- Polanyi, Karl (1967 [1957]). “La economía como proceso institucionalizado”, en Maurice Godelier (Ed.), *Antropología y economía*. Barcelona: Anagrama, 155-177.
- (2017 [1944]), *La gran transformación: crítica del liberalismo económico*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Queiroz, Maria Isaura Pereira de (1973). *Bairros Rurais Paulista. Dinâmica das Relações Bairro Rural – Cidade*. São Paulo: Ed. Duas Cidades.
- Sabourin, Éric (2014). “L’agriculture brésilienne en débat: évolutions récentes, controverses et politiques publiques”. *Problèmes d’Amérique Latine*, 95(4), 33-55.
- Sader, Eder (1989). *Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80)*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Sanchez, Fábio (2004). *Identidade e Conflito: A construção política dos “remanescentes de quilombo” do Vale do Ribeira*, Tesis de Maestría. Departamento de Sociología. Universidade de São Paulo.
- Sanchez, Fabio; Turatti Maria Cecília (2012). “Agricultura familiare ed etnicità: le trasformazioni delle lotte contadine in Brasile”. *Sociologia del lavoro*, 128, 135-51.
- Sempreviva Organização Feminista (SOF) (2016). *Mulheres do campo construindo autonomia. Experiências de comercialização*. São Paulo: SOF.
- Siliprandi, Emma (2009). *Mulheres e Agroecologia: a construção de novos sujeitos políticos na agricultura familiar*. Tesis doctoral. Centro de Desenvolvimento Sustentável. Universidade de Brasília.
- Souza, Pedro Oliveira de; Silva, Rodrigo Ozelame de (2013). “Breve história da Cooperafloresta e do Pedro, contada por ele mesmo”, en Walter Steenbock; Letícia Da Costa e Silva, Rodrigo Ozelame da Silva, *et al., op. cit.*: 25-38.
- Steenbock, Walter; da Costa e Silva, Letícia; Ozelame da Silva, Rodrigo *et al.* (Orgs.) (2013). *Agrofloresta, ecologia e sociedade*. Curitiba: Kairós.
- Telles, Liliam (2018). *Desvelando a economia invisível das agricultoras agroecológicas*. Tesis de Maestría. Departamento de Economía Rural. Universidade Federal de Viçosa.
- Telles, Liliam; Jalil, Laeticia; Cardoso, Elisabeth; Alvarenga, Camila Rafaela (2018). “Cadernetas Agroecológicas e a contribuição econômica das agricultoras agroecológicas no Brasil”, en Gloria Patricia Zuluaga, Georgina Catacora-Vargas y Emma Siliprandi (Eds.), *Ibid*, 141-158.
- Tronto, Joan (2009 [1993]). *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*. Paris: La Découverte.
- Zielinski, A. (2010). “L’éthique du care. Une nouvelle façon de prendre soin”. *Études*, 413(12): 631-641.

## 8. Lista de siglas

- ANA: Alianza Nacional de Agroecología.  
 ATER: Asistencia Técnica y Extensión Rural.  
 CONTAG: Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas.  
 MST: Movimento de Trabalhadores sin Terra de Brasil.  
 PAA: Programa de Adquisición de Alimentos.  
 PTA: Proyecto de Tecnologías Alternativas.  
 SOF: *Sempreviva Organização Feminista*.